

# Más presión sobre el Gobierno para acelerar la nueva financiación - Levante - 26/05/2021

A.G.

■ Un día después de manifestarse por el trasvase Tajo-Segura ante el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid (allí estuvo la consellera Mireia Mollà), los tres partidos del Gobierno valenciano (PSPV, Compromís y Unides Podem) apoyaban ayer elevar la presión sobre la Moncloa en el frente de la financiación autonómica.

No lo hacen solos, sino en el marco de la plataforma en la que está también Ciudadanos (no así el PP), la patronal CEV y los sindicatos UGT y CC OO. Es la Comissió per un Finançament Just que organizó la manifestación en Valencia en noviembre de 2017.

La línea reivindicativa supone subrayar la propuesta aprobada en abril pasado en el Congreso de los Diputados. Esta salió adelante solo con los votos en contra de Vox y la abstención del PP. Esta proposición no de ley presentada por Compromís y pactada con PSOE y Unidas Podemos insta al Gobierno a presentar una propuesta de nuevo modelo de financiación antes de que acabe el año.

## Concentración el 15 de junio

Y eso es lo que insiste en reclamar ahora la plataforma valenciana: pedir una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el día 15 de junio, día en el que tiene previsto realizar una concentración simbólica en la puerta del Congreso con los diputados valencianos. Quiere visibilizar así la «urgencia de iniciar las negociaciones para el cambio del modelo de financiación antes de que finalice el año».

Más presión, por tanto, sobre Montero, que la semana pasada estuvo en Valencia por el congreso estatal de UGT y evitó fechas concretas sobre el nuevo modelo, aunque sí señaló que se han iniciado trabajos técnicos.

La posición de la comisión genera complicaciones especiales sobre todo para el PSPV, que está

## Más presión sobre el Gobierno para acelerar la nueva financiación

► La comisión con los partidos del Botànic, Cs, la patronal y sindicatos anuncia una protesta en el Congreso y pide una reunión con Montero



María Jesús Montero, al entrar ayer en la sala de prensa tras el Consejo de Ministros.

EUROPA PRESS

El Consell vuelve a situarse frente a Sánchez un día después de marchar en Madrid por el trasvase

al frente del Gobierno de España. En este sentido, algún otro partido proponía ayer incluir la exi-

gencia de los fondos europeos para paliar la infrafinanciación valenciana, pero finalmente se optó por no mezclar líneas que operan con criterios diferentes.

La plataforma, que tiene la presión por su parte del PP, que la acusa de no ser tan exigente como lo fue con Mariano Rajoy, insistió ayer en la «injusta» situación económica del territorio valenciano, «agravada ahora más por la reciente crisis» del covid-19.

Precisamente, la comisión explica que el acto en Madrid no será multitudinario por seguridad sanitaria. Solo una personalidad representativa de la sociedad civil valenciana leerá el manifiesto *Por una financiación justa* a las puertas del Congreso. Los nombres que se barajan son los de la oncóloga Anna Lluch; la rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón, y el director del IVIE, Francisco Pérez.

## Soler defiende un criterio para el fondo covid diferente al del Ejecutivo

Plantea que se use la población ajustada frente a la fórmula del PIB por la que apuesta el ministerio

CARLOS ALÓS

■ La Generalitat rechaza la posición del Ministerio de Hacienda y defiende que el criterio para el reparto mayoritario del

fondo covid tiene que ser el de población ajustada. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, explicó ayer su rechazo al criterio de reparto basado en el PIB «porque supondría reforzar todavía más la divergencia en renta per cápita entre territorios y favorecería las desigualdades».

Soler propone un tramo de 7.000 millones para reforzar el estado de bienestar; otro de 3.486 millones para atender

gastos derivados de la covid y uno final de 3.000 millones para compensar la infrafinanciación.

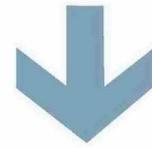
Esa es la propuesta de la Generalitat para proceder al reparto de los fondos extraordinarios para las comunidades autónomas para el año 2021, el conocido como Fondo Covid, dotado con 13.486 millones de euros.

Soler sostiene que la propuesta de población ajustada, pese a ser mejorable, represen-

ta una mejor aproximación a las necesidades de gasto de los territorios» por lo que podría ser la utilizada de forma mayoritaria en la distribución del fondo.

El conseller añade que a día de hoy la Comunidad Valenciana considera que el indicador de necesidades de gasto más idóneo es el de la población total, dado que no existen evidencias concluyentes de diferenciación de costes de provisión para el conjunto de los servicios públicos autonómicos.

Y recuerda que los expertos ya consideraron aconsejable introducir variables nuevas a la fórmula de población ajustada.



**Clamor** en el Senado por la mejora de los recursos locales

► Siete eminentes voces del mundo académico forjaron ayer un frente común en el Senado para advertir al Gobierno de la necesidad de abordar con urgencia una reforma de calado del sistema de financiación local que profundice en la autonomía y la responsabilidad fiscal de los ayuntamientos después de cuatro años de compromisos en punto muerto. En el marco de una jornada de trabajo promovida por Fedea y la Fundación Olof Palme, seis catedráticos de distintas universidades y el experto en financiación Ángel de la Fuente pusieron de relieve las ineficacias y desigualdades del actual reparto de fondos y desgranaron nueve propuestas para corregirlas. Entre ellas destaca un nuevo esquema de transferencias del Gobierno que incorpore mecanismos de nivelación similares a los que el Consell pide a nivel autonómico. Otro de los puntos plasmados en un documento aboga por potenciar las transferencias incondicionales a través de mecanismos como el Fondo de Cooperación activado por el Ejecutivo valenciano. Los expertos también instan a reordenar el obsoleto mapa tributario local, adaptando a las singularidades y al siglo XXI la regulación del IBI y las normas de valoración de inmuebles y diseñando cuanto antes una nueva normativa del impuesto de plusvalía, ante el caos generado por el mandato del Tribunal Constitucional, que anuló buena parte de los supuestos de cobro y que se sigue obviando de forma generalizada. Los especialistas urgen a clarificar y ampliar las competencias locales en asuntos como los servicios de atención social primaria, la Ley de Dependencia o la protección del medioambiente, así como a reformular el papel de las diputaciones, de manera que dediquen fundamentalmente sus recursos al apoyo técnico y financiero a los pequeños municipios. S. GÓMEZ